

Recomendación General No 02/2024

Aguascalientes, Aguascalientes, a veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO para emitir la presente Recomendación General sobre el resultado de la visita de supervisión para verificar los derechos de las personas en situación de detención la que versó sobre, alojamiento, higiene de las celdas, servicios médicos y en general las condiciones en las que se encuentra el Centro de Detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, en la que se observaron diversas situaciones que afectan sus derechos, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En fecha dieciocho de octubre del dos mil veinticuatro se realizó visita de supervisión al Centro de Detención del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por personal adscritos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, en la que se asentó que no se encontraban personas detenidas, no hay un lugar adecuado y específico para albergar a personas menores de edad, a este grupo etario se les ubica en el área de recepción con la custodia de un elemento de seguridad pública mientras llegan sus padres, ya que la Jueza Calificadora se encarga de contactar a sus familiares para que acudan por las citadas personas. Del recorrido a las instalaciones del centro se observó que no existe un área específica habilitada o acondicionada para albergar a dichas personas. Las dos letrinas de las celdas que en la parte superior cuentan con lavamanos a decir de la entrevistada cuentan con descarga de agua, sin embargo, el día de la visita no funcionaban ni para lavamanos ni para descarga del sanitario. Asimismo, el área de sanitario dentro de la celda no cuenta con privacidad que le proporcione una barda o pared, la persona que haga uso de la instalación está a la vista de las demás personas detenidas. A las personas detenidas se les suministra agua de garrafón la cual se les proporciona en vasos desechables, sin que se aprecien los mismos. En el momento de la visita se informó que un médico va a certificar a los detenidos cuando se le llama, aunado a que no cuentan con dicho servicio las veinticuatro horas del día, que de necesitarse el servicio médico de emergencia se auxilian de paramédicos del Centro de Salud del Municipio que se encuentra enfrente de la Dirección de Seguridad Pública y de ser necesario la persona es llevada al Hospital de Pabellón de Arteaga.

II. CONSIDERANDO

2. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes es un organismo constitucional autónomo de protección y defensa de los derechos humanos y que posee la facultad de emitir recomendaciones públicas a las autoridades de carácter estatal o municipal, según disposición expresa de los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 6 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

3. Dentro de las facultades que tiene este órgano público autónomo protector de derechos humanos está la de supervisar que las condiciones de las personas

privadas de su libertad que se encuentren en los separos de la Policía Ministerial, Seguridad Pública, Centros de Internamiento o Centros de Reinserción Social, estén apegadas a la ley y se garantice el pleno respeto a sus Derechos Humanos, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 9º fracción VII de la Ley Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, por lo que el personal de la Comisión deberá tener acceso a las personas privadas de su libertad.

4. El artículo 9 fracciones VIII, XV y XXII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos señala que entre las facultades de la Comisión estarán: formular opiniones de carácter general que contribuyan al conocimiento y difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos, velar por el cumplimiento de las normas que consten en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y que tienen como objetivo la tutela y promoción de los Derechos Humanos, asimismo, vigilar permanentemente el cabal cumplimiento del respeto de los Derechos Humanos en todas las dependencias estatales y municipales. El artículo 1º párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación que las normas de derechos humanos sean interpretadas conforme a los instrumentos internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

5. Por su parte el artículo 19 fracciones XVI y XX del ordenamiento antes citado dispone que es facultad de la o el presidente de la Comisión solicitar el auxilio de autoridades competentes a efecto de obtener la información necesaria para la defensa de los Derechos Humanos, así como aprobar y emitir las recomendaciones públicas que resulten de las investigaciones realizadas por la Comisión.

6. En términos de las facultades citadas, este organismo debe supervisar que las autoridades garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona, y con mayoría de razón de aquellos grupos de atención prioritaria, y para tal efecto deberá recomendar medidas tendientes a salvaguardarlos frente a las amenazas, perturbaciones, restricciones o violaciones de cualquier autoridad.

7. Por ministerio de la ley se impone como deber de colaboración a las diferentes autoridades de la administración pública, a fin de que en atención a sus competencias protejan, respeten y garanticen los derechos humanos, siendo la esencia del tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. En este tenor, y a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas en el Centro de Detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, se analiza lo siguiente:

9. En la Recomendación 49VG/2021 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se estableció que la dignidad humana implica el valor inherente al ser humano por ser un ente racional, lo que se traduce en el derecho que las personas tienen a ser valoradas como sujeto individual y social, con sus características y condiciones personales, pero en igualdad de circunstancias. Así, la dignidad de una persona es el soporte de sus derechos humanos, los que son inmutables, inherentes e inalienables y por

lo mismo inviolables, en este sentido son contrarios a la dignidad, los tratos indignos, vejatorios, humillantes y ofensivos, así como la desigualdad.¹

10. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que “*Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos*”.² También resolvió que: “*Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna*”³. Por lo que, “*Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar*”⁴.

11. El trato digno consiste en “*la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y reconocidas por el orden jurídico*”.⁵

12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que “*la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privadas de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de incomunicación, tortura o intimidación, así como sus prerrogativas durante el proceso*”⁶.

13. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten

¹ CNDH Recomendación 49VG/2021, Sobre el caso de violación grave a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de V, persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahualtán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pág 15

² Caso “Neira Alegría y otros Vs. Perú”, (Fondo), sentencia de 19 de enero de 1995, p. 60.

³ Caso “Mendoza y otros vs. Argentina” 27.002, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones. 14 de mayo de 2013, p. 7 punto 188.

⁴ Caso “Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras” 12.680 Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de abril de 2012, p. 20 punto 64.

⁵ José Luis Soberanes Fernández, coord. Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos México/CNDH 2008, pág. 73.

⁶ Voto particular que formula la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en el amparo directo en revisión 1338/2012.

a las personas detenidas deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos⁷.

14. La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, el sistema de los centros de detención no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.⁸

15. Los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, define a la persona privada de su libertad como “*cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea una institución pública o privada en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria.*”⁹

16. Los numerales 5.2 y 5.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que el Estado Mexicano es parte integrante, establecen que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto inherente al ser humano.

17. En los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se consagran derechos humanos que deben ser respetados y garantizados a las personas privadas de libertad, como es el caso del Principio I que hace referencia al trato humano y que establece que “*Toda persona privada de la libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con estricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los estados frente a las personas privadas de libertad se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Se les protegerá contra todo acto de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, castigos corporales y todos aquellos métodos que tengan como finalidad anular personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona*”¹⁰.

18. De la visita de supervisión realizada por este órgano autónomo a las instalaciones del centro de detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes se constató que el mismo en la actualidad no cuenta con personal médico durante las veinticuatro horas del día, por lo que para realizar valoraciones médicas a todas las personas detenidas se auxilian de paramédicos del Centro de Salud del Municipio que se ubica enfrente de la Dirección de Seguridad Pública.

⁷ *Idem*

⁸ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)* (Viena: Asamblea General, resolución 70/175, anexo, 2015), Página 3.

⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, 2008.

¹⁰ *Idem*



artículo 1449, fracción IV del Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes dispone que es obligación del oficial de guardia solicitar en su caso el examen psicofísico de los presuntos infractores puestos a disposición del Juez Calificador. Asimismo, La regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) referente a los servicios médicos establece "1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado"¹¹, mientras la regla 30 dispone "Un médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario"¹². El Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión dispone que se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De las disposiciones antes citadas se desprende que la certificación médica deberá realizarse inmediatamente después del ingreso del infractor, lo anterior para hacer constar el estado físico en que ingresa el detenido, durante su estancia tan a menudo como sea necesario y al egreso de su estancia, pues esos documentos son los que acreditan las condiciones físicas en que se encontraba la persona detenida a su ingreso, durante su estancia y al egreso del centro de detención.

19. En la entrevista que se realizó a la Jueza Calificadora manifestó que tienen medicamento del cuadro básico en el servicio médico, sin embargo, de la visita de campo no se pudo comprobar, ya que, solo cuentan con un botiquín con muy pocas cosas. El principio número X, párrafo primero y tercero de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye entre otros, la atención médica. El estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. En virtud de que el derecho a la protección de la salud está contemplado como derecho humano en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en los centros de detención se deberá de contar con el equipo necesario para prestar los servicios de primeros auxilios y medicamentos del cuadro básico favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º Constitucional, que establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretaran conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales de la materia.

20. En el acta circunstanciada de fecha dieciocho de octubre del dos mil veinticuatro también se asentó que en el centro de detención de San José de Gracia las letrinas cuentan con descarga de agua, las cuales el día de la visita no funcionaban y las mismas no cuentan con privacidad pues no tienen ningún elemento que permita

¹¹ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)* (Viena: Asamblea General, resolución 70/175, anexo, 2015), Página 6.

¹² *Ibidem* p. 7

privacidad. El principio número XII, punto dos, primer párrafo de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas. Por lo que es un derecho de las personas detenidas el acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y que cuenten con el suministro de agua en las celdas para hacer sus necesidades fisiológicas y acceso a lavarse las manos, por lo que es necesario que el sanitario de la celda como los lavabos del centro de detención municipal cuenten con agua y con elementos que permitan la privacidad.

21. De la visita de supervisión realizada por este órgano autónomo a las instalaciones del centro de detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes se constató que, si bien es cierto, cuentan con agua potable de garrafón, también lo es que no se apreció la existencia de vasos o utensilios adecuados para hacer efectivo el derecho de las personas privadas de la libertad a que tomen dicha agua potable. En los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se consagran derechos humanos que deben ser respetados y garantizados a las personas privadas de libertad, como es el caso del Principio XI, punto 2 que hace referencia al agua potable y que establece que "Toda persona privada de la libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley". Por su parte la regla 22.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) referente a la alimentación y agua potable establece "2. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite". Por lo que es necesario que se cuente con vasos o utensilios para que las personas detenidas puedan tomar agua en condiciones higiénicas y dignas.

22. De la visita de supervisión realizada por este órgano autónomo a las instalaciones del Centro de Detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, se constató que el citado centro no cuenta con un área específica habilitada o acondicionada para albergar a las personas menores de edad, ya que de acuerdo con la información proporcionada por la Jueza calificadora, en tanto localizan a los padres de las personas menores de edad las ubican en el área de recepción. Al respecto, establece la Regla 11 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento según las circunstancias que ahí mismo se señalan, y el inciso d) establece "d) los jóvenes estarán separados de los adultos". En este mismo sentido se pronuncia el artículo 13.4 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing" al establecer que "Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos".

23. El artículo 18 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en materia de justicia para personas adolescentes el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que

proceda, y podrá aplicarse únicamente a las personas adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, ya que la misma Constitución prevé evitar las detenciones de personas y reservarlo sólo para quienes habiendo cumplido los catorce años cometan hechos que la ley señale como delitos.¹³ De acuerdo con las citadas disposiciones, las y los menores de edad que están bajo resguardo en el Centro de Detención del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, deben de ser ubicados en un área diferente a la recepción, es decir, en un área específica, sin embargo, el dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro que personal de este organismo realizó la supervisión en las instalaciones del centro no observó que existiera un área específica habilitada y acondicionada para albergar a las personas menores de edad. Por lo que, se debe de adecuar un espacio acondicionado y específicamente para albergar a este grupo etario.

24. En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintitrés se realizó la Recomendación General No. 4/2023 emitida por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, dirigida al Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San José de Gracia mediante la cual se le hicieron cinco recomendaciones, de las que no se dio cumplimiento ni observación a ninguna.

25. Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, considera que las autoridades del Centro de Detención Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes deben implementar acciones para el respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan y permanecen en resguardo o detenidas en ese centro de detención, por lo que se emiten las siguientes:

III. RECOMENDACIONES

26. A la persona titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento de San José de Gracia, Aguascalientes y Director General de Gobierno, en términos de los artículos 1º párrafo tercero y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que los Municipios tendrán a cargo las funciones y servicios públicos en materia de Seguridad Pública, respetuosamente se recomienda lo siguiente:

- a) Realizar las acciones necesarias para que el centro de detención del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes cuente con personal médico que brinde atención las veinticuatro horas del día todos los días de año para que revisen el estado físico de todas las personas que ingresan en calidad de arrestadas o detenidas al centro de detención y que dicha revisión se realice a su ingreso y a su egreso, además de que realicen supervisiones y atenciones médicas durante la permanencia de las personas detenidas.
- b) De igual forma se realicen las gestiones necesarias para que el área médica cuente con el equipo necesario para prestar los servicios de primeros auxilios y medicamentos del cuadro básico.
- c) Se realicen las acciones necesarias para que los sanitarios ubicados en las celdas del centro de detención del San José de Gracia, Aguascalientes cuenten con el suministro de agua, así como de acceso a lavabos para que

¹³ Precedente (sentencia), Asunto: Acción de Inconstitucionalidad 21/2004, Instancia Pleno Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007 Registro 20337. Pág. 84.



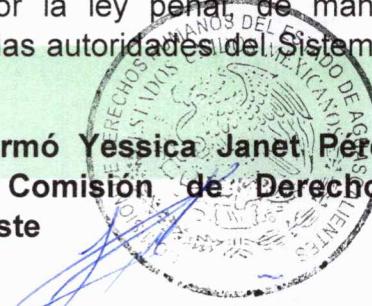
las personas detenidas puedan lavarse las manos y así cuidar su salud. Ordenándose los arreglos correspondientes a las tuberías para contar con dicho servicio. Asimismo, para que los sanitarios permitan la privacidad y dignidad de la persona detenida.

d) Se realicen las acciones necesarias para que el centro de detención cuente con vasos o utensilios con los que las personas detenidas puedan tomar agua dignamente.

e) Las personas menores de edad que están bajo resguardo en el Centro de Detención del Municipio de San José de Gracia, deben permanecer en un área específica, habilitada o acondicionada para ese grupo etario, que sea diferente a las celdas. Y al imputárseles hechos que pueden ser tipificado como delito por la ley penal de manera inmediata deben ponerse a disposición de las autoridades del Sistema de Justicia Penal para personas adolescentes.

Así lo proveyó y firmó Yessica Janet Pérez Carreón, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. conste

Elaboró Rrj.



CDHEA

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de AGUASCALIENTES